

Rol: 8480-2018

Ministro: Mera Muñoz, Juan Cristóbal

Ministro: Pérez Anker, José Santos

Redactor: Mera Muñoz, Juan Cristóbal

Abogado integrante: De Alencar Baraona, Rodrigo

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago(CSAN)

Partes: María Brilladero Brilladero con Humberto Faúndez Neira y otros

Tipo Recurso: Recurso de Apelación

Tipo Resultado: Acogido-Revoca

Fecha: 02/07/2019

Cita Online: CL/JUR/3859/2019

Hechos:

Demandados interponen recurso de casación en la forma y de apelación contra la sentencia que acogió la demanda de nulidad absoluta de contrato de cesión de derechos por simulación. La Corte de Apelaciones rechaza el recurso de casación en la forma y revoca el fallo impugnado, rechaza la demanda en todas sus partes

Sumarios:

1 . Sobre la simulación don Jorge López Santa María ha dicho que "Hay simulación cuando los efectos de un acto aparente o simulado son modificados o completamente suprimidos por otro acto destinado a permanecer en secreto. El Código Civil chileno no legisla armónicamente sobre la simulación, a pesar de que ella es un fenómeno harto frecuente. La doctrina y la jurisprudencia nacionales han ido construyendo el estatuto jurídico no penal de la simulación, básicamente a partir del inciso primero del artículo 1707: ¿Las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura pública no producirán efecto contra terceros?". Lo que el derecho sanciona no es propiamente la simulación sino la simulación ilícita, esto es, aquella que tiene por objeto burlar a terceros, la que se hace de mala fe, debiendo recordarse que la buena fe es un principio general del derecho o, en los términos del artículo 24 del Código Civil, uno que informa el espíritu general de la legislación y que el ordenamiento jurídico protege de muy variadas formas, una de ellas declarando la jurisdicción la simulación y la consecuente nulidad de un determinado acto jurídico. Tres son las clases de simulación que distingue la doctrina de los autores y de los tribunales superiores: a) la absoluta, en que el acto que está a la vista nada oculta, o sea, no hay verdaderamente contratación; b) la relativa, en que se celebra un acto jurídico real pero disimulado bajo la forma de uno distinto; y c) por interpósita persona, o sea, aquella que para burlar las incapacidades y prohibiciones legales se usa un testaferro. Ahora bien, la convención absolutamente simulada adolece de ausencia de voluntad y, en consecuencia, la acción de simulación absoluta se confunde, en el hecho, con la acción de nulidad absoluta por falta de consentimiento. En cuanto a la simulación relativa, si bien no necesariamente la acción de simulación es un antecedente de la acción de nulidad, si la supuesta donación, que sería la convención oculta bajo la apariencia de una compraventa, no cumple con la exigencia de la insinuación establecida en el artículo 1401 del Código Civil y, por lo mismo, se vulnera una prohibición, el acto jurídico disimulado, por adolecer de objeto ilícito, será nulo de nulidad absoluta, en conformidad con el artículo 1682 del Código Civil. Y en la simulación por interpósita persona, hay nulidad absoluta por objeto ilícito por cuanto el contrato disimulado infringe una norma prohibitiva (considerando 8° de la sentencia de la Corte de Apelaciones)

2 . La prueba en materia de simulación no escapa a la regla general del artículo 1698 del Código Civil, esto es, debe demostrarla quien la alega, en este caso la actora. Mas ciertamente no puede esperarse que la verdadera intención de los contratantes sea manifestada en instrumento público o algo semejante pues, precisamente, se imputa a los demandados que han ocultado su verdadera intención. La jurisdicción, entonces, llamada a resolver un conflicto de esta naturaleza, precisamente debe escudriñar más allá de la forma, debe analizar el resto de la prueba que no sea solamente la escritura pública de cesión y, especialmente, determinar si es posible construir presunciones, esto es, establecer hechos a partir de determinados indicios o señales (considerando 11° de la sentencia de la Corte de Apelaciones)

3 . El artículo 1683 del Código Civil exige al solicitante de nulidad absoluta que "tenga interés en ello", interés que debe ser pecuniario, esto es, debe reportar un beneficio económico al solicitante la declaración de nulidad absoluta que impetra a la judicatura respecto de un determinado acto jurídico. Ahora bien, como la nulidad debe ser judicialmente declarada, lo que significa que antes del pronunciamiento del juzgador el acto en cuestión es válido, necesariamente se deben analizar los requisitos de la nulidad al momento de dictar sentencia y no a la época de la traba de la litis. Así, si lo que produce la nulidad es la declaración judicial emitida sobre el particular, el análisis de la procedencia de esta institución debe hacerse al tiempo de la sentencia definitiva. Y sucede que antes de dictarse el fallo de primer grado, el demandado pagó a la actora la suma adeudada, con sus

intereses y costas, único crédito que ésta tenía sobre aquél y, por lo mismo, le es indiferente a la demandante si el demandado transfiere sus bienes a un tercero pues ya no es su acreedora y no tiene, entonces, el llamado "derecho de prenda general" sobre el patrimonio del demandado (considerandos 14° y 15° de la sentencia de la Corte de Apelaciones)

Texto Completo:

Santiago, dos de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS:

En estos autos rol 11.245 2016 del Undécimo Juzgado Civil de esta ciudad sobre nulidad absoluta de contrato por simulación, caratulados "Brilladero Brilladero, María del Carmen con Faúndez Neira, Humberto Alejandro; Ceballo Carrasco, Johanna Isabel; y Fuentealba Godoy, José Luis", por sentencia de veinte de abril de dos mil dieciocho, escrita de fojas 235 a 243, el juez titular de dicho tribunal, don Ricardo Núñez Videla, acogió la demanda y declaró nulo absolutamente el contrato de cesión de derechos de 21 de enero de 2015 suscrito por los demandados relativo a la oficina N° 505 del edificio ubicado en calle Bombero Salas N° 1369, comuna de Santiago, disponiendo la cancelación de la inscripción de fojas 13.625 N° 20.215 del Registro de Propiedad del año 2015 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, condenando en costas a los demandados. En contra de esta resolución, los demandados señor Humberto Alejandro Faúndez Neira y señora Johana Isabel Ceballo Carrasco dedujeron los recursos de casación en la forma y apelación. Por su parte, el demandado señor José Luis Fuentealba Godoy impugnó la sentencia definitiva de primera instancia sólo a través del recurso de apelación.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA.

PRIMERO: Que es necesario, para resolver el recurso de nulidad formal y, eventualmente, hacerse cargo de las apelaciones deducidas en contra del fallo de primer grado, hacer constar los siguientes antecedentes del proceso:

1. El 9 de septiembre de 2013, don Enrique Stillner Gómez, don Humberto Alejandro Faúndez Neira y la señora María del Carmen Brilladero Brilladero compraron en comunidad, por iguales partes, la oficina N° 505 del edificio ubicado en Bombero Salas N° 1369 de la comuna de Santiago, por un precio de \$32.500.000, que se pagó al contado y en efectivo, reflejándose en la escritura de venta otorgada ante el Notario de Santiago don Pablo González Caamaño que dicho precio se pagaría por los compradores por partes iguales. Empero, como el señor Faúndez no contaba con dinero suficiente, pues sólo disponía de \$6.000.000, la actora señora Brilladero le prestó la diferencia, esto es, \$4.833.000, girándole el señor Faúndez un cheque de su cuenta personal por la suma aludida.

2. En el mes de abril de 2014 el señor Stillner le vendió a la señora Brilladero sus derechos en el inmueble mencionado, en la suma de \$13.000.000, conjuntamente con los muebles, pagando el precio también al contado. Luego, la señora Brilladero era comunera con el señor Faúndez en la propiedad de la oficina, teniendo aquella un 66,6% del derecho de dominio y el señor Faúndez el 33,3%.

3. El 19 de enero de 2015 la actora depositó el cheque que le había entregado en su oportunidad el señor Faúndez, documento que fue protestado por orden de no pago por "incumplimiento contractual", lo que la llevó a realizar su cobranza judicial ante el 16° Juzgado Civil de esta ciudad, en causa rol 1917 15.

4. El 21 de enero de 2015, mediante escritura pública de compraventa y cesión de derechos, suscrita ante el Notario de Santiago don Francisco Leiva Carvajal, el señor Humberto Alejandro Faúndez Neira, autorizado por su cónyuge doña Johanna Isabel Ceballo Carrasco, vendió y cedió sus derechos en la oficina 505 de Bombero Salas N° 1369 (1/3 del derecho de dominio), a don José Luis Fuentealba Godoy, en \$16.000.000, suma que se pagó al contado, según se consignó en el título, el que fue inscrito a fojas 13.625 N° 20.215 del Registro de Propiedad de 2015 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. 5. La señora Brilladero, el 4 de mayo de 2016, dedujo demanda en contra de los señores Faúndez Neira y Fuentealba Godoy y en contra de la señora Ceballo Carrasco, señalando que "tal acto jurídico (la venta de los derechos de Faúndez a Fuentealba) fue ejecutado en forma maliciosa y simulada...ya que el cedente lo hacía como una manera de evitar que la suscrita pudiera hacer uso del derecho de prenda general que le asiste, evitando el cumplimiento de la obligación de pago que aún pende en contra del demandado Faúndez Neira", agregando que "En los hechos, Faúndez aún me adeuda la cantidad de \$4.833.000", pidiendo la invalidación del acto jurídico referido por simulación.

6. Está demostrado, tanto en primera instancia como en segunda, que el señor Faúndez, en la causa rol 1917 2015 del 16° Juzgado Civil de esta ciudad, pagó la suma de \$4.833.000 a la señora Brilladero, además de

\$759.429, girándose los cheques correspondientes en favor de la demandante señora Brilladero. Tales consignaciones fueron hechas el 24 de febrero de 2017 y el 8 de junio del mismo año, respectivamente. Tales sumas corresponden al capital con sus intereses y costas de la obligación emanada del cheque a que se refieren los números 1 y 3 de esta relación de hechos.

7. La sentencia, de 20 de abril de 2018, razonó que el contrato cesión de derechos de 21 de enero de 2015, relativo a la oficina 505 del edificio de calle Bombero Salas N° 1369, Santiago, es efectivamente simulado porque no hay prueba que el demandado señor Fuentealba Godoy haya tenido solvencia económica ni disposición de fondos para pagar, el 21 de enero de 2015, la suma de \$16.000.000, que es el precio del contrato en cuestión, agregando que, "Faúndez Neira y Fuentealba Godoy simularon un contrato de cesión de derechos con el único objeto de sacar del patrimonio del primero afectado de ese modo el derecho general de prenda que tiene Brilladero Brilladero, siendo por ende el objeto del mismo el defraudar a un acreedor. Siendo el objeto ilícito y atento lo establecido en el artículo 1682 del Código Civil es que habrá de accederse a la demanda, declarándose la nulidad absoluta del contrato de cesión de derechos de 21 de enero de 2015, como asimismo la inscripción conservatoria generada a su consecuencia". El mismo sentenciador señaló que, en cuanto a la falta de interés de la actora por haberse pagado ya el cheque por \$4.833.000 con sus intereses y costas, refiere que "la cesión de derechos que se cuestiona fue realizada días antes de que se iniciara el proceso en su fase administrativa gestión preparatoria pero con posterioridad al protesto del cheque, hecho que ocurrió el 19 de enero de 2015".

SEGUNDO: Que sostienen los demandados Faúndez Neira y Ceballo Carrasco que la sentencia se encuentra viciada, en primer término, por la causal del N° 5° del artículo 768, con relación al N° 4° del artículo 170, ambas disposiciones del Código de Procedimiento Civil. Refieren, en efecto, que el fallo impugnado omite los fundamentos de hecho y de derecho en la determinación de la existencia del supuesto interés económico de la actora, lo que se constata en los considerandos octavo y décimo de la sentencia recurrida. El juez redactor da por establecido que en el presente caso entre los demandados se habría simulado un contrato de cesión de derechos y que por ello habría objeto ilícito, a pesar que no hay antecedentes en el proceso que permitan concluir que hay simulación ni menos que haya habido objeto ilícito y, por el contrario agregan los recurrentes, está demostrado que el señor Fuentealba Godoy pagó al señor Faúndez Neira el precio de la cesión y que a su vez el señor Faúndez consignó en los autos ejecutivos rol C 19172015 del 16° Juzgado Civil de Santiago, con fecha 24 de febrero de 2017, el monto adeudado a la demandante señora Brilladero.

TERCERO: Que el requisito que señala el citado N° 4° del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, aunado a lo que contemplan los números 5° a 9° del Auto Acordado de la Corte Suprema de Justicia de 30 de septiembre de 1920, obliga al redactor de una sentencia a consignar las consideraciones de hecho o de derecho que le sirven de fundamento, lo que, como se ha sostenido por ese alto tribunal, tiende a asegurar la justicia y la legalidad de los fallos y a proporcionar a los litigantes los antecedentes que les permitan conocer los motivos que determinaron la decisión del litigio para la interposición de los recursos por medio de los cuales fuere posible la modificación o invalidación de los mismos.

CUARTO: Que baste leer el fallo impugnado para advertir que cumple con la exigencia que se echa en falta pues describe resumidamente las posiciones jurídicas de las partes manifestadas en sus escritos de la etapa de discusión, enumera la prueba rendida y, luego, en el motivo décimo, realiza las reflexiones de hecho y de derecho que llevan al juzgador de primer grado a la conclusión manifestada en lo resolutivo. Que los recurrentes no compartan tales disquisiciones y las estimen erradas no constituye la causal invocada, que como se ha dicho, sólo exige un discurrir y no uno acertado. El yerro en la labor de ponderación de la prueba debe impugnarse a través del recurso de apelación, también deducido en la especie.

QUINTO: Que una segunda causal de casación se hace consistir en lo que dispone el N° 4° del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, a saber, la ultra petita. Se explayan los recurrentes en señalar que como se consignó en el N° 7 del considerando primero de este fallo la sentencia impugnada declaró que la cesión de derechos cuya nulidad pretende la demandante adolece de objeto ilícito, lo que nunca fue invocado por la demandante.

SEXTO: Que por definición legal se produce la ultra petita cuando la sentencia otorga más de lo pedido por las partes o se extiende a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, o sea, como se ha dicho por la Corte Suprema, cuando apartándose de los términos en que las partes situaron la controversia por medio de sus respectivas acciones o excepciones, altera el contenido de éstas cambiando su objeto o modificando su causa de pedir. SÉPTIMO: Que en la especie el fallo impugnado no incurre en el vicio denunciado pues la parte demandante ha señalado en su demanda de fojas 1 que "...el vicio que afectó al acto jurídico ha sido un consentimiento irreal y simulado...tal cesión es un contrato que carece de un acuerdo real de voluntades, por lo mismo no existe consentimiento, causa real y lícita en relación con la parte cedente...además carece de

objeto...", de modo que la judicatura efectivamente está facultada por la alegación de dicha parte para pronunciarse sobre la existencia de objeto y, ciertamente, sobre su licitud o ilicitud, aunque no se haya mencionado la expresión "objeto ilícito". Es decir, si en la demanda se dice que un contrato adolece de falta de objeto, no falla en ultra petita la sentencia que consigna que sí tiene objeto pero que es ilícito. EN CUANTO AL RECURSO DE APELACIÓN.

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus considerandos décimo y undécimo, que se eliminan. Asimismo, de su considerando séptimo se suprimen sus párrafos cuarto, quinto y sexto.

Y SE TIENE EN SU LUGAR Y, ADEMÁS, PRESENTE:

OCTAVO: Que sobre la simulación don Jorge López Santa María ha dicho en su obra "Contratos. Parte General" que "Hay simulación cuando los efectos de un acto aparente o simulado son modificados o completamente suprimidos por otro acto destinado a permanecer en secreto. El Código Civil chileno no legisla armónicamente sobre la simulación, a pesar de que ella es un fenómeno harto frecuente. La doctrina y la jurisprudencia nacionales han ido construyendo el estatuto jurídico no penal de la simulación, básicamente a partir del inciso primero del artículo 1707: Las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura pública no producirán efecto contra terceros;". Lo que el derecho sanciona no es propiamente la simulación sino la simulación ilícita, esto es, aquella que tiene por objeto burlar a terceros, la que se hace de mala fe, debiendo recordarse que la buena fe es un principio general del derecho o, en los términos del artículo 24 del Código Civil, uno que informa el espíritu general de la legislación y que el ordenamiento jurídico protege de muy variadas formas, una de ellas declarando la jurisdicción la simulación y la consecuente nulidad de un determinado acto jurídico. Tres son las clases de simulación que distingue la doctrina de los autores y de los tribunales superiores: a) la absoluta, en que el acto que está a la vista nada oculta, o sea, no hay verdaderamente contratación, como el caso del deudor que simula enajenar sus bienes a terceros para impedir que sus acreedores obtengan su realización para pagarse sus créditos; b) la relativa, en que se celebra un acto jurídico real pero disimulado bajo la forma de uno distinto, como cuando se realiza una donación oculta bajo el ropaje de una compraventa; y c) por interpósita persona, o sea, aquella que para burlar las incapacidades y prohibiciones legales se usa un testaferro, como si el marido, para esquivar la prohibición de venderle a su cónyuge de la que no está separado judicialmente, vende la cosa a un tercero, el que posteriormente a su vez la vende a la mujer. Ahora bien, la convención absolutamente simulada adolece de ausencia de voluntad y, en consecuencia, la acción de simulación absoluta se confunde, en el hecho, con la acción de nulidad absoluta por falta de consentimiento. En cuanto a la simulación relativa, si bien no necesariamente la acción de simulación es un antecedente de la acción de nulidad, si la supuesta donación, que sería la convención oculta bajo la apariencia de una compraventa, no cumple con la exigencia de la insinuación establecida en el artículo 1401 del Código Civil y, por lo mismo, se vulnera una prohibición, el acto jurídico disimulado, por adolecer de objeto ilícito, será nulo de nulidad absoluta, en conformidad con el artículo 1682 del Código Civil. Y en la simulación por interpósita persona, hay nulidad absoluta por objeto ilícito por cuanto el contrato disimulado infringe una norma prohibitiva.

NOVENO: Que en la especie se ha demandado la nulidad absoluta de la cesión de derechos agregado a fojas 12, celebrada por escritura pública de 21 de enero de 2015, por la cual Humberto Alejandro Faúndez Neira, autorizado por su cónyuge doña Johanna Isabel Ceballo Carrasco vendió a José Luis Fuentealba Godoy los derechos que Faúndez tenía en el inmueble signado como oficina 505 del edificio de Bombero Salas N° 1369, en la comuna de Santiago, por simulación absoluta, esto es, por no existir verdaderamente una voluntad de contratar, teniendo el negocio jurídico como único y exclusivo objeto impedir que la señora Brilladero ejerciera su derecho de prenda general que tenía sobre los bienes del señor Faúndez a raíz de una deuda que éste mantenía con aquella por \$4.833.000 y que originó una demanda ejecutiva de cobro de cheque en el 16° Juzgado Civil de Santiago, en causa rol 1917 2015.

DÉCIMO. Que la acción de simulación debe ser rechazada por dos razones: a) porque no hay prueba suficiente de que entre las partes del acto jurídico impugnado haya habido sólo una apariencia de voluntad; y b) porque, en todo caso, al momento de dictarse la sentencia la actora ya no tiene interés en la acción de nulidad deducida pues su crédito se ha visto satisfecho, de suerte que el hecho que los derechos en la oficina mencionada hayan sido vendidos al demandado señor Fuentealba, no le produce perjuicio.

UNDÉCIMO: Que la prueba en materia de simulación no escapa a la regla general del artículo 1698 del Código Civil, esto es, debe demostrarla quien la alega, en este caso la actora. Mas ciertamente no puede esperarse que la verdadera intención de los contratantes sea manifestada en instrumento público o algo semejante pues, precisamente, se imputa a los demandados que han ocultado su verdadera intención en los términos ya indicados. La jurisdicción, entonces, llamada a resolver un conflicto de esta naturaleza, precisamente debe escudriñar más allá de la forma, debe analizar el resto de la prueba que no sea solamente la

escritura pública de cesión y, especialmente, determinar si es posible construir presunciones, esto es, establecer hechos a partir de determinados indicios o señales. El artículo 47 del Código Civil señala al respecto: "Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas". Es decir, tratándose de simulación, precisamente son los indicios, que eventualmente llevan a la construcción de presunciones judiciales, la manera en que normalmente se construye la prueba idónea para demostrar los hechos que constituyen la simulación. DUODÉCIMO: Que los indicios en el caso sub lite no permiten arribar a la conclusión que el aludido contrato de fojas 12 fue otorgado simuladamente, con la única finalidad de perjudicar los intereses de la señora Brilladero, en la forma narrada. De hecho, hay indicios que tal contrato sí contiene una real manifestación de voluntad por parte del señor Faúndez de vender sus derechos en el inmueble mencionado y del señor Fuentealba de comprarlos.

DECIMOTERCERO: Que, en efecto:

1. El precio fijado en la cesión, \$16.000.000, por un 33,3% del derecho de dominio del inmueble una oficina en el centro de Santiago no parece estar alejado del precio de mercado o, al menos, ello no fue alegado en la demanda. Es decir, no está cuestionado que \$16.000.000 por el 33,3% de los derechos de una oficina en calle Bombero Salas N° 1369 en esta comuna sea un precio real y serio.

2. La deuda que el demandado señor Faúndez mantenía con la demandante señora Brilladero era de \$4.833.000, esto es, una suma de un relativo bajo monto, que no justifica realizar el ardid de una venta simulada de un tercio del derecho de dominio en la oficina 505 del edificio de Bombero Salas 1369 en Santiago, para defraudar a la acreedora que cuenta con un cheque de su deudor, documento que constituye título ejecutivo y que, en definitiva, permitió a la actora iniciar la acción correspondiente y hacerse con el pago de la obligación, con intereses y costas.

3. La capacidad económica de la parte del señor Fuentealba, comprador de los derechos que pertenecían al señor Faúndez, perfectamente le permite adquirirlos por \$16.000.000. El señor Fuentealba es empleado del 13° Juzgado Civil de Santiago, vive solo y sus remuneraciones le permiten hacer tal operación. Que se haya dicho que los \$16.000.000 se pagaron de contado y que ello no haya sucedido efectivamente así no torna el acto jurídico en simulado.

4. Las cartolas de la cuenta corriente del demandado señor Fuentealba muestran que tiene dos fuentes de ingresos, mas no permiten saber ni su capacidad de ahorro ni lo que efectivamente haya podido haber ahorrado, sin que la suma de \$16.000.000 parezca inalcanzable para un funcionario del escalafón de empleados del Poder Judicial.

5. De este modo, no hay evidencia suficiente que el contrato impugnado haya sido simulado absolutamente, esto es, que no haya habido una real voluntad de vender por parte de Faúndez ni de comprar por parte de Fuentealba. Y, lo más importante, estos antecedentes no permiten construir presunciones en los términos del inciso final del artículo 1712 del Código Civil. DECIMOCUARTO: Que, como se adelantó, sea como fuere, el artículo 1683 del Código Civil exige al solicitante de nulidad absoluta que "tenga interés en ello", interés que debe ser pecuniario, esto es, debe reportar un beneficio económico al solicitante la declaración de nulidad absoluta que impetra a la judicatura respecto de un determinado acto jurídico. Ahora bien, como la nulidad debe ser judicialmente declarada, lo que significa que antes del pronunciamiento del juzgador el acto en cuestión es válido, necesariamente se deben analizar los requisitos de la nulidad al momento de dictar sentencia y no a la época de la traba de la litis. Sobre el particular, Arturo Alessandri Besa, en su obra "La Nulidad y la Rescisión en el Derecho Civil Chileno", Editorial Jurídica, 3ª edición, 2008, Tomo I, página 27, señala que "Se puede sostener con mayor propiedad que la nulidad, lejos de ser un medio de extinguir obligaciones, es un medio de invalidar los contratos y demás actos jurídicos, quedando comprendida entre las causas legales, de que habla el artículo 1545 del Código Civil; o sea, que antes que la nulidad sea declarada, el contrato, u otra convención o acto unilateral, produce todos sus efectos, cuales son, las obligaciones y derechos que de ellos nacen, o las modificaciones que en los que existan puedan introducir; pero una vez anulado por la justicia, desaparece, y con él, las obligaciones, derechos u otros efectos que había generado, todo ello con efecto retroactivo...", agregando luego que "...en realidad, el modo de extinguir las obligaciones es la declaración de nulidad, o sea, la sentencia judicial que la declara, la cual, una vez ejecutoriada, produce todos los efectos propios de la nulidad..." DECIMOQUINTO: Que así, si lo que produce la nulidad es la declaración judicial emitida sobre el particular, el análisis de la procedencia de esta institución debe hacerse al tiempo de la sentencia definitiva. Y sucede que antes de dictarse el fallo de primer grado, como se dijo en la relación de hechos del motivo primero, el demandado señor Faúndez pagó a la actora la suma adeudada, con sus intereses y costas, único crédito que ésta tenía sobre aquél y, por lo mismo, le es indiferente a la señora Brilladero si el señor Faúndez transfiere sus bienes a un tercero pues ya no es su acreedora y no tiene, entonces, el llamado "derecho de prenda general" sobre el patrimonio del señor Faúndez.

DECIMOSEXTO: Que de acogerse la demanda se daría el sinsentido que a pesar que la señora Brilladero ha visto satisfecha plenamente su acreencia por parte de su deudor el señor Faúndez y, por lo mismo, carece de perjuicio, igualmente se invalidaría el contrato de compraventa de derechos ("cesión") al que se ha hecho referencia, continuando el señor Faúndez como comunero de la señora Brilladero, perjudicando así los intereses del comprador, señor Fuentealba, el actual comunero con la señora Brilladero en la propiedad de la oficina 505 del edificio de calle Bombero Salas N° 1369, en Santiago.

DECIMOSÉPTIMO: Que, en conclusión, tal como se consignó en el considerando décimo, tanto por no haber prueba de la simulación, cuanto porque de existir, ésta no le ha irrogado perjuicio a la demandante, perjuicio que debe ser analizado a la época de dictación de la sentencia definitiva, la demanda debe ser desestimada.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 144, 186 y 768 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en la forma deducido por los demandados señor Faúndez y señora Ceballos en lo principal de su presentación de fojas 251 en contra de la sentencia de veinte de abril de dos mil dieciocho, escrita de fojas 235 a 245, la que se revoca y se decide, en cambio, que la demanda de fojas 1 queda rechazada en todas sus partes, sin costas por haber tenido la actora motivos plausibles para litigar.

Redacción del Ministro señor Mera.

Regístrese y devuélvase.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el Ministro (s) señor José Pérez Anker y por el Abogado Integrante señor Rodrigo De Alencar Baraona. Rol N° 8480 2018.

Información Relacionada

Voces:

ACCION DE NULIDAD ~ ACTO JURIDICO ~ BUENA FE ~ COMPRAVENTA ~ CONTRATO ~ CORTE DE APELACIONES ~ DERECHO CIVIL ~ DONACION ~ ESTADOS UNIDOS ~ MALA FE ~ NULIDAD ~ NULIDAD ABSOLUTA ~ NULIDAD DEL CONTRATO ~ OBJETO LICITO ~ PROHIBICIONES ~ SENTENCIA ~ SIMULACION ~ TERCEROS

Voces:

CESION ~ COMPETENCIA ~ COMPRAVENTA ~ CORTE DE APELACIONES ~ DERECHO CIVIL ~ ESCRITURA PUBLICA ~ INSTRUMENTO PUBLICO ~ NULIDAD ABSOLUTA ~ NULIDAD DEL CONTRATO ~ PRESUNCION ~ SENTENCIA ~ SIMULACION ~ TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA

Voces:

ACTO JURIDICO ~ BENEFICIO ~ COMPRAVENTA ~ CORTE DE APELACIONES ~ COSTAS ~ CREDITO ~ DERECHO CIVIL ~ DERECHO GENERAL DE PRENDA ~ NULIDAD ~ NULIDAD ABSOLUTA ~ NULIDAD DEL CONTRATO ~ PATRIMONIO ~ PRENDA ~ SENTENCIA ~ SENTENCIA DEFINITIVA ~ SIMULACION ~ TERCEROS ~ TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA

Legislacion Relacionada

[Artículo 1682 - NACI - Código Civil \(P.L.\) - 9999-12-31](#)

[Artículo 1683 - NACI - Código Civil \(P.L.\) - 9999-12-31](#)

[Artículo 1698 - NACI - Código Civil \(P.L.\) - 9999-12-31](#)

Jurisprudencia Relacionada

[Corte de Apelaciones de Concepción - Digna Saldías Martínez con Isaías Martínez Torres - 2019-10-09 - Nulidad absoluta de contrato. Contrato de transacción. Contrato sigue siendo válido mientras no se declare su nulidad o ineficacia. Necesidad de demandar a todas las partes que celebraron el contrato, no solo a una de ellas.](#)

[Corte de Apelaciones de Santiago - Ricardo Fazekas Vargas con Pamela Navarro Cortes y otra - 2019-11-07 - Nulidad de contrato de compraventa. Insuficiencia probatoria para acreditar que la demandada tuviera conocimiento de una promesa de compraventa anterior entre el actor y un tercero. Venta de inmueble un año después de su compra no conlleva la existencia de un contrato simulado](#)